

Señores
ALCALDÍA DE CARTAGENA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Ciudad

REF. Agotamiento requisito de procedibilidad Acción Constitucional Popular.

Respetados señores:

Me dirijo a ustedes, conforme al artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, para agotar requisito de procedibilidad, previo a interponer **Acción Constitucional Popular**, que nos indica:

“Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudir ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda”.

Esto con el fin de solicitarles, respetuosamente, que adopten las medidas de manera **INMEDIATA**, que consideren necesarias según sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, donde se realice la sustitución inmediata de animales de tracción (coches de caballos) por la implementación de vehículos eléctricos para el transporte de personas.

Lo anterior lo solicito teniendo en cuenta la Declaración Universal de los derechos de los Animales en sus artículos 2.a; 3.a; 10.a y 14.b al entenderse la implementación de este tipo de transporte como innecesaria y significar condiciones materiales precarias para los animales, entendidos por la jurisprudencia constitucional colombiana como seres sintientes, en concordancia con lo dispuesto por la ley 1774 de 2016 que modifica a su vez el Código Civil colombiano reconociendo a los mismos como seres vivos sujetos de derechos y no como bienes muebles.

Así mismo, vale resaltar en el literal “c” del artículo 3 de la legislación previamente citada, la cual consigna el principio de solidaridad social respecto a los animales, positivizado del siguiente modo:

“El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física.

Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales; también es su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de los que se tenga conocimiento”.

En este orden de ideas, es deber del Estado colombiano y de sus gentes la preservación, la garantía y la conservación de las condiciones materiales necesarias para el goce efectivo de los derechos por parte de los animales, propendiendo por la implementación de los ajustes necesarios desde lo público y lo privado para lograr tal fin.